



**Consejo Económico  
y Social**

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1989/SR.18  
24 de julio de 1989

ESPAÑOL  
Original: INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

45° período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 18a. SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,  
el viernes 10 de febrero de 1989, a las 15 horas

Presidente: Sr. QIAN Jiadong (China)

más tarde, Sr. BOSSUYT (Bélgica)

SUMARIO

Violaciones de los derechos humanos en el Africa meridional: informe del  
Grupo Especial de Expertos (continuación)

Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la  
asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta a los  
regímenes colonialistas y racistas del Africa meridional (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo.  
Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además,  
incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse,  
dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento,  
a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio  
de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas del presente periodo de  
sesiones se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la  
clausura del periodo de sesiones.

SUMARIO (continuación)

Aplicación de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (continuación)

Estudio, en colaboración con la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, sobre los medios para lograr la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con el apartheid, el racismo y la discriminación racial (continuación)

Aplicación del Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial(continuación)

Cuestión de poner en práctica, en todos los países, los derechos económicos, sociales y culturales que figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y estudio de los problemas especiales con que se enfrentan los países en desarrollo en sus esfuerzos para la realización de estos derechos humanos con inclusión de:

- a) Los problemas relacionados con el derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, el derecho al desarrollo
- b) Los efectos que el injusto orden económico internacional actual tiene sobre las economías de los países en desarrollo, y el obstáculo que ello representa para la aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales
- c) La participación popular en sus diversas formas como factor importante del desarrollo y de la plena realización de todos los derechos humanos

Situación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos

Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFRICA MERIDIONAL: INFORME DEL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS (tema 6 del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/8, 49 y 60; E/CN.4/1989/NGO/28)

CONSECUENCIAS ADVERSAS QUE TIENE PARA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS LA ASISTENCIA POLITICA, MILITAR, ECONOMICA Y DE OTRA INDOLE QUE SE PRESTA A LOS REGIMENES COLONIALISTAS Y RACISTAS DEL AFRICA MERIDIONAL (tema 7 del programa) (continuación) (E/CN.4/Sub.2/1986/6 y Add.1; E/CN.4/1989/3; E/CN.4/Sub.2/1988/45 (capítulo I, sección A, proyecto de resolución II)

APLICACION DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESION Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID (tema 16 del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/31 y Add.1 a 11, E/CN.4/1989/32 y 33; E/CN.4/1989/NGO/2)

ESTUDIO, EN COLABORACION CON LA SUBCOMISION DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONES Y PROTECCIÓN A LAS MINORIAS, SOBRE LOS MEDIOS PARA LOGRAR LA APLICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS RELACIONADAS CON EL APARTHEID, EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL (tema 17 a) del programa) (continuación)

APLICACION DEL PROGRAMA PARA EL DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL (tema 17 b) del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/34 y 35; E/1988/8, 9 y Add.1 y 2 y E/1988/10; A/43/631, 637 y 644; A/C.3/43/CRP.1)

1. El Sr. EL TURABI (Observador del Sudán) dice que cuando la comunidad internacional hace todo lo posible por defender los derechos de la mayoría negra en el Africa meridional, también está defendiendo los valores humanos en general, ya que el abominable sistema del apartheid podría aplicarse asimismo en contra de cualquier otro grupo étnico en otros lugares. Por consiguiente, su delegación confía en que las partes que han reconocido el derecho de todos los pueblos a librar una lucha legítima utilizando todos los medios posibles para alcanzar la independencia y recuperar sus derechos asumirán actitudes consecuentes y cesarán de prestar ayuda militar, económica y política al régimen del apartheid, ya que hay acuerdo general en que Sudáfrica depende de esa ayuda.

2. Su delegación toma nota complacida de las actividades del Grupo Especial de Expertos y de otros órganos de las Naciones Unidas en la lucha contra el apartheid. Sin embargo, opina que esos esfuerzos quedarán incompletos y serán infructuosos mientras los Estados no apliquen las sanciones económicas amplias contra el régimen racista sudafricano aprobadas por el Consejo de Seguridad en consonancia con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Todos los Estados deben proseguir su lucha contra el racismo y el apartheid. Ese es el fundamento del Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

3. A juicio de su delegación, se debería asignar prioridad a ese Programa en lucha contra la discriminación racial. No obstante, como se indica en el informe actualizado del Relator Especial sobre las consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta al régimen racista y

colonialista de Sudáfrica (E/CN.4/Sub.2/1988/6 y Add.1), esa asistencia tiene efectos negativos en la situación de los derechos humanos de quienes no son de raza blanca en Sudáfrica y dificulta aún más la erradicación del apartheid.

4. Su Gobierno observa complacido que desde la firma del Acuerdo Tripartito Namibia está más cerca de alcanzar la independencia. Sin embargo, subraya la necesidad de garantizar que el proceso de independencia se lleve a cabo en consonancia con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, de forma que no se pueda recurrir a elecciones fraudulentas para convertir la lucha de los namibianos en letra muerta. Su delegación piensa que sería peligroso reducir el número de tropas de las Naciones Unidas que estarán llamadas a mantener la paz durante el período de transición.

5. Su Gobierno, que hará todo lo posible por ayudar al pueblo namibiano bajo la dirección de la SWAPO, y a los Estados de primera línea, felicita a los miembros de la comunidad internacional que han superado su complejo de superioridad racial y han vuelto a abrazar los principios de la fraternidad, la justicia y la igualdad.

6. El Sr. MOUKHTAR (Observador, Organización de la Unidad Africana) rinde un homenaje especial a las organizaciones no gubernamentales que, gracias a sus múltiples e incesantes actividades, han podido informar a la opinión pública mundial, así como a los encargados de formular políticas sobre los efectos perniciosos del apartheid. Las organizaciones no gubernamentales están realizando una labor admirable en la lucha contra el apartheid, sobre todo en aquellos países cuyos gobiernos mantienen o permiten vínculos de diversa índole con Pretoria.

7. Los informes presentados con ocasión del actual período de sesiones de la Comisión han venido a recordar a quienes pensaron que la situación en el Africa meridional estaba mejorando, que, a pesar del Acuerdo Tripartito, que suscitó un optimismo injustificado en algunos sectores, no ha habido cambios sustantivos en Namibia o Sudáfrica. Ambos territorios se hallan sometidos a un estado de emergencia y las fuerzas represivas sudafricanas perpetran toda una serie de actos inhumanos que la Comisión continúa denunciando y condenando. La población civil indefensa, incluidos los niños, que sólo reclama sus derechos legítimos en lo tocante al disfrute de las libertades democráticas, sigue siendo víctima de la violencia racista, los arrestos, las detenciones arbitrarias y la tortura.

8. La comunidad internacional no debe atenuar su vigilancia con respecto al apartheid, que sigue siendo la fuente de todos los conflictos que afectan a la región meridional del Africa. Mientras el apartheid, que ha sido calificado de crimen contra la humanidad, subsista en cualquier forma, peligrarán la paz y la seguridad de la región, se acrecentarán las corrientes de refugiados y de personas desplazadas y continuarán las violaciones de los derechos humanos de la mayoría oprimida.

9. El clima de distensión que ha contribuido a dar un nuevo impulso a la aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad sobre la independencia de Namibia no debe distraer la atención de la comunidad internacional de su objetivo fundamental de erradicar el sistema inhumano del

apartheid. Debe aumentarse la presión que se ejerce sobre Pretoria e imponer sanciones obligatorias a ese régimen hasta que se establezca una sociedad democrática y multilateral en Sudáfrica.

10. Las declaraciones de los expertos han puesto de relieve la falsedad del argumento esgrimido por algunos gobiernos que se oponen a las sanciones de que esas medidas perjudicarían principalmente a la mayoría en Sudáfrica y a los pueblos de los países de primera línea. Los integrantes de la mayoría negra, que están dispuestos a sacrificar la propia vida para conseguir sus derechos, se hallan preparados para sufrir los efectos perjudiciales de las sanciones. Ello confirma a la OUA en su convicción de que el único medio capaz de garantizar el desmantelamiento del apartheid es la aplicación de sanciones amplias y obligatorias contra Pretoria.

11. Es preciso convencer a las grandes Potencias de que asignen mayor importancia a la dignidad del hombre que a sus intereses económicos, comerciales y estratégicos. Los derechos humanos son indivisibles y la Organización de la Unidad Africana aprovecha la oportunidad para exhortar a las instituciones financieras internacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a que se nieguen a otorgar préstamos o créditos o a prestar servicios comerciales a Sudáfrica a fin de acrecentar el estrangulamiento financiero del régimen minoritario.

12. A pesar de los enormes problemas que dimanaban del mantenimiento del estado de emergencia en Namibia y en Sudáfrica y de los ataques terroristas lanzados por las fuerzas de Pretoria en los países de primera línea, la SWAPO, el ANC y el Congreso PanAfricanista de Azania, así como los diferentes movimientos democráticos, han seguido intensificando su lucha contra el apartheid. De resultados de la censura, las luchas de liberación y las odiosas medidas represivas de Pretoria se llevan a cabo en la penumbra, lejos de los corresponsales de prensa. En esas circunstancias, las reformas superficiales impulsadas por el régimen minoritario se convirtieron en noticia de primera plana y debilitaron en alguna medida la lucha incesante que libran las fuerzas democráticas contra la fortaleza racista, que tendía a volverse cada vez menos monolítico debido a la creciente oposición de una parte de la comunidad blanca al dogma del apartheid.

13. Por consiguiente, es preciso dar mayor publicidad al testimonio de quienes sufren en carne propia las consecuencias nefastas del racismo institucionalizado.

14. Los pueblos de Africa, que están tomando por asalto los últimos bastiones del colonialismo y del racismo en Namibia y Sudáfrica, están ligados a los países árabes y a los palestinos que luchan contra el ocupante israelí. El eje Tel Aviv-Pretoria pone claramente de relieve que ya no puede haber más dilaciones en lo que atañe al derecho inalienable de los palestinos a regresar a su patria y a establecer un Estado soberano.

15. La OUA se suma a los llamamientos que se han dirigido al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de que prosiga sus esfuerzos por conseguir que se aplique la letra y el espíritu de la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, es decir, por garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para que Namibia pueda alcanzar una independencia genuina en condiciones de libertad, orden y democracia.

16. Señala a la atención de la Comisión el reciente establecimiento por la OUA en Brazzaville de un Comité contra el apartheid que actuará como órgano de coordinación de las actividades de los movimientos africanos e internacionales contra el apartheid. La Asamblea constituyente, que contó con la participación de los Estados miembros de la OUA y de organizaciones africanas y no africanas contra el apartheid, ha aprobado un programa de acción encaminado a intensificar la campaña internacional en pro de la aplicación de sanciones amplias y obligatorias contra el régimen racista de Pretoria.

17. En 1981 los países independientes de Africa aprobaron una Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos. Tras su firma y ratificación por los Estados miembros de la OUA, en la 23a. Reunión en la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la OUA, celebrada en junio de 1987, se estableció una Comisión compuesta de 11 jueces cuya función es promover y proteger esos derechos. Gambia accedió a acoger la sede de esa institución. La Comisión ya ha celebrado varias reuniones en diferentes capitales africanas. Ha iniciado sus actividades sustantivas y establecido contactos alentadores con el Centro de Derechos Humanos. La OUA celebra los prometedores pasos iniciales que ha dado la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y agradecerá cualquier asistencia que le puedan facilitar las delegaciones que asisten al período de sesiones en curso.

18. La Sra. SELMANE-BOUAMRANE (Observadora de Argelia) dice que el oprobioso sistema del apartheid ha sido condenado unánimemente por la comunidad internacional, que sigue abogando por su erradicación. Sin embargo, el régimen sudafricano hace oídos sordos ante las reclamaciones de la comunidad internacional e insiste en su afán de desafiarla.

19. No cabe duda de que la arrogancia de Pretoria está relacionada con la incapacidad de la comunidad internacional para aplicar, conforme a lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, sanciones amplias y obligatorias como único medio pacífico para acabar con el apartheid. Así, las actividades de la Comisión son una parte de los esfuerzos en curso de la comunidad internacional por sustituir un sistema caracterizado por la segregación y la discriminación por uno más humano y democrático.

20. La Comisión ha venido recibiendo informes periódicos del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional durante más de 20 años. En el último informe (E/CN.4/1989/8) se presenta un cuadro inquietante de la situación actual en el Africa meridional. El informe pone de relieve, entre otras cosas, que durante el período en examen no ha aminorado la práctica de torturar e infligir tratos inhumanos y degradantes de otra índole a niños y jóvenes.

21. Habida cuenta de la intransigencia del régimen de Sudáfrica, es imprescindible que la comunidad internacional haga un esfuerzo decidido por inducir al régimen a que abandone su absurda política. A ese respecto, su delegación reafirma que las sanciones amplias y obligatorias siguen siendo el único medio pacífico capaz de poner fin a ese sistema.

22. La concertación del acuerdo que abre la vía para que Namibia acceda a la independencia sobre la base de la aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad ha de permitir que el pueblo namibiano ejerza su derecho a la libre determinación. Sin embargo, la comunidad internacional tiene el deber de mantenerse vigilante a fin de garantizar que el pueblo de Namibia pueda expresar su aspiración a la independencia de forma libre y auténtica y que el apartheid quede abolido efectivamente en ese país.

23. El informe del Relator Especial (E/CN.4/Sub.2/1986/6 y Add.1) demuestra una vez más la validez de su estudio y pone de relieve que cualquier tipo de asistencia que se suministre al régimen existente repercute adversamente en la situación de los derechos humanos de los no blancos en Sudáfrica y dificulta aún más la erradicación del apartheid.

24. Esa situación ha llevado a algunos países a adoptar medidas de desvinculación en el plano económico. Su delegación celebra ese acontecimiento y comparte lo señalado por el Relator Especial cuando expresa la esperanza de que ese movimiento de desvinculación habrá de proseguir.

25. Con todo, las sanciones sólo pueden ser eficaces si tienen un carácter amplio y si crean las condiciones necesarias para eliminar el apartheid por completo mediante el debilitamiento de uno de los pilares importantes del sistema, a saber, la economía. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos de forma que el establecimiento pleno del ejercicio de los derechos humanos y las libertades en Sudáfrica pueda convertirse en realidad.

26. En lo que se refiere al informe del Grupo de los Tres Miembros de la Comisión sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (E/CN.4/1989/33), su delegación celebra el alto número de informes presentados por los Estados Partes durante el año en curso en consonancia con el artículo VII de la Convención, que pone de relieve la importancia que esos Estados asignan al cumplimiento de las obligaciones contraídas y su voluntad de luchar contra un sistema considerado acertadamente como un crimen contra la humanidad.

27. La lucha contra el racismo y la discriminación racial supone asimismo unas actividades encaminadas a promover un mayor conocimiento de los hechos, que es la razón de ser del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. El Programa prevé la realización de importantes actividades concebidas para lograr un objetivo altamente encomiable. Por consiguiente, resulta lamentable observar que esas actividades no se han completado. Lamentablemente, una de las principales causas de lo anterior ha sido el carácter limitado de los recursos disponibles. Así, es indispensable que se hagan contribuciones al Fondo Especial para el Programa.

28. Sólo la acción mancomunada de la comunidad internacional puede garantizar el logro de las metas del Decenio. A ese respecto, su delegación acoge con beneplácito la resolución 43/91 de la Asamblea General, en que se decidió que la comunidad internacional en general, y las Naciones Unidas en particular, han de continuar asignando la más alta prioridad a los programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial y el apartheid, especialmente en Sudáfrica y Namibia y en los territorios ocupados, así como en los territorios sometidos a la dominación extranjera.

29. Su delegación confía en que las perspectivas de que Namibia acceda a la independencia darán paso próximamente a un futuro de paz en el África meridional y al fin del apartheid.

30. El Sr. WALDEN (Observador de Israel) dice que el Gobierno de su país siempre ha dejado constancia de su condena inequívoca de la política del apartheid que se aplica en Sudáfrica. Toda política basada en las falsas doctrinas de que los seres humanos pueden distinguirse unos de otros sobre la base del color o presuntas diferencias raciales, o de que cualquier presunta raza puede sentirse superior a cualquier otra, es totalmente contraria a la doctrina judía de la igualdad de los seres humanos manifestada en la Biblia y consagrada en la declaración de independencia de Israel. Sería inconcebible que el Estado judío, tras los sufrimientos experimentados por el pueblo judío en nombre de dichas doctrinas, adoptara una posición diferente de cualquier forma. Es el ferviente deseo de ese pueblo que el apartheid, y la malévola filosofía que lo sustenta desaparezca de la faz de la Tierra.

31. Las medidas más recientes concernientes a la política del Gobierno de Israel incluyen las siguientes: prohibición de nuevas inversiones en Sudáfrica; prohibición de préstamos gubernamentales, de la venta y transferencia de petróleo y productos derivados del petróleo y de la importación de krugerrands, y la congelación de las importaciones de hierro y acero al nivel alcanzado. Se han de disminuir los vínculos culturales entre ambos países a un nivel que refleje la actitud negativa de Israel ante el apartheid, y los vínculos deportivos estarán sujetos a las decisiones de las asociaciones deportivas internacionales. Israel creará un fondo para prestar asistencia en la ejecución de programas de formación educativa, social y cultural en Israel para miembros de las comunidades negra y de color de Sudáfrica. Por último, se adoptarán medidas para impedir que el territorio israelí sirva de zona de tránsito para el movimiento de bienes y servicios entre Sudáfrica y otros países, con objeto de evadir sanciones adoptadas por cualquier tercer país.

32. Además, Israel ha adoptado medidas positivas para fomentar buenas relaciones con la comunidad negra de Sudáfrica. El Instituto Afroasiático de la Federación General Israelí del Trabajo ha desempeñado una función importante a ese respecto. Por ejemplo, en abril de 1986 celebró su primer seminario práctico, especialmente destinado a los dirigentes de la comunidad negra en Sudáfrica, en que participaron 20 personas, todos antiguos combatientes contra el apartheid. Hasta la fecha, se han celebrado otros tres seminarios. El Instituto también ha realizado actividades análogas en la propia Sudáfrica. Se dio una calurosa bienvenida al equipo del Instituto que estableció contacto con un gran número de hombres y mujeres de una amplia gama de actividades.

33. Las acusaciones infundadas lanzadas por algunos Estados contra Israel durante el debate en la Comisión no pueden alterar estos hechos. Israel ha demostrado su condena de la política de apartheid y su deseo de fomentar relaciones con la población negra en Sudáfrica. El orador espera que esas políticas y las políticas análogas adoptadas por otros países acaben por dar fruto, con la terminación del régimen de apartheid y la creación de un sistema basado en la igualdad y la dignidad.



34. En conclusión, dice que el Gobierno de su país celebra los recientes acontecimientos relacionados con Namibia y espera el día en que ese país pueda sumarse a los otros Estados africanos independientes amantes de la paz.

35. El Sr. LEKOUNDA-BOUMY (Observador del Gabón) observa que, a pesar de las resoluciones y recomendaciones pertinentes de las Naciones Unidas, el régimen de Pretoria sigue cometiendo graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población negra de Sudáfrica. Esas violaciones de los derechos humanos se caracterizan por una política de discriminación racial y segregación, que tiene la firme condena de la comunidad internacional. El apartheid es un sistema repulsivo y detestable y un reto a la humanidad. La comunidad internacional tiene el deber de combatir contra todas las injusticias infligidas a millones de hombres, mujeres y niños inocentes en Sudáfrica, Namibia e incluso en el Estado soberano de Angola.

36. El peligro creado por la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica afecta también directamente a los Estados de primera línea. Todos esos hechos demuestran que Sudáfrica no tiene intención de abandonar su política de segregación racial. Por lo tanto, las naciones amantes de la paz deben ayudar a lograr la eliminación total del apartheid, que constituye un terrorismo de Estado.

37. Habida cuenta de la intransigencia de las autoridades en Pretoria, el Gobierno del Gabón siempre ha alentado la apertura del diálogo entre los auténticos representantes de las poblaciones negra y blanca de Sudáfrica. Por ello, la comunidad internacional debe apoyar las actividades del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica y del Congreso Panafricanista de Azania y estos movimientos de resistencia deben recibir los mismos favores que se otorgan a otros, tales como la SWAPO.

38. En relación con Namibia, el Gobierno del Gabón se felicita de la concertación del Acuerdo Tripartito firmado en Nueva York el 22 de diciembre de 1988 por Sudáfrica, Cuba y Angola. Ese acuerdo permite tener la esperanza de que Namibia se libere de la ocupación sudafricana y Angola de una guerra que le ha impedido otorgar prioridad a la solución de los verdaderos problemas del desarrollo económico, social y cultural. Los Estados que han contribuido a la firma del Acuerdo deben proseguir sus esfuerzos para que se lleve a cabo el 1º de abril de 1989 el proceso de aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, en virtud de la cual el pueblo namibiano ejercerá finalmente su derecho a la libre determinación y logrará la soberanía nacional.

39. Sin embargo, la comunidad internacional debe mantenerse vigilante. Una lectura minuciosa del Acuerdo de Nueva York demuestra que no se hace referencia al reconocimiento, promoción y garantía de los derechos humanos. En segundo lugar, la delegación del Gabón se enteró hace algunas horas de que el Gobierno de Angola ha acusado a Sudáfrica de haber enviado tropas a la parte meridional de ese país, en violación del Acuerdo. El Gobierno del Gabón considera que el establecimiento de una sociedad namibiana libre que no se base en criterios raciales exige la eliminación total de todas las formas de discriminación y la retirada definitiva de las tropas sudafricanas.

40. La reciente mejora de las relaciones internacionales es una fuente tanto de inseguridad como de esperanza. La inseguridad es el fruto de todas las espantosas actividades que ha mencionado el orador, perpetradas cotidianamente por Sudáfrica y otros países, tales como Israel, con el cual el Gobierno del Gabón ha roto relaciones diplomáticas. Tales actividades afectan gravemente la promoción y protección de los derechos humanos. Por último, hay motivo de esperanza, habida cuenta de todos los esfuerzos realizados en los últimos meses, en especial en relación con la solución pacífica de los conflictos internacionales.

41. El Sr. SHAIKHO (Observador de Bahrein) dice que, como el régimen de Pretoria no respeta las resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y otras organizaciones internacionales, la única posibilidad que le queda a la comunidad internacional es de imponer sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica, conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Es preciso romper todos los vínculos diplomáticos, económicos y militares con Sudáfrica.

42. La causa de la mayoría negra de Sudáfrica es la causa de todo ser humano que cree en la humanidad, la justicia y el imperio del derecho. La comunidad internacional debe tratar de aplicar efectivamente el Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. También es de importancia primordial ejercer presión sobre Pretoria para que libere a Nelson Mandela y los demás presos políticos y detenidos.

43. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para poner en práctica la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, en que figura el plan para la independencia total de Namibia, y apoyar a la Organización Popular de Africa Sudoccidental (SWAPO), representante auténtico del pueblo namibiano.

44. El Sr. OMAR (Observador de la Jamahiriya Arabe Libia) dice que la comunidad internacional debe oponerse firmemente a la injusticia y la humillación que Sudáfrica impone a hombres, mujeres y niños negros. El régimen racista también mina el desarrollo económico y social de los Estados de primera línea e impide que toda la región del Africa meridional logre la prosperidad y viva en paz y seguridad.

45. Sólo la presión económica conducirá al cambio en Sudáfrica y el Consejo de Seguridad debe imponer sanciones amplias y obligatorias a fin de precipitar la caída del odioso régimen de Pretoria. La continuación de ese régimen llevará a un baño de sangre en la región que puede implicar al mundo entero. La mayoría abrumadora de los negros considera la imposición de las sanciones amplias y obligatorias un medio eficaz de poner fin al apartheid y la idea de que la población negra de Sudáfrica se opone a dichas sanciones es totalmente infundada.

46. El Acuerdo Tripartito de 22 de diciembre de 1988 sobre la cuestión de Namibia ofrece un destello de esperanza de que este país finalmente se verá libre de la ocupación extranjera. Sin embargo, la delegación libia cree que el régimen agresivo y racista de Sudáfrica podría tomar medidas para explotar el Acuerdo y mantener a Namibia bajo su control. Tal como lo ha señalado el

representante de la SWAPO, todo intento de reducir el tamaño del Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de Transición será inaceptable, ya que Sudáfrica podría usar tal reducción como pretexto para introducir sus propias fuerzas. La delegación libia apoya la sugerencia del representante de Nigeria de que, con carácter de urgencia, la Comisión envíe una carta al Secretario General en que le manifieste su grave preocupación por la propuesta reducción del personal del Grupo de Asistencia.

47. La Jamahiriya Arabe Libia, que ha accedido a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, condena todas las formas de discriminación racial, inclusive el apartheid. Las empresas transnacionales que se niegan a retirar inversiones de Sudáfrica tienen la plena responsabilidad de que siga existiendo el régimen de Pretoria y hay que adoptar medidas jurídicas para contrarrestar sus actividades.

48. El Sr. VARGAS (Observador de Nicaragua) dice que han sido miles los patriotas sudafricanos que han muerto por el simple hecho de reclamar sus derechos humanos y protestar contra el apartheid. El Gobierno nicaragüense condena las vejaciones de que son objeto los jóvenes y los niños africanos de parte de los racistas blancos de Sudáfrica, en su obsesión por perpetuar el apartheid. De conformidad con el informe de la Comisión de Encuesta organizada en Johannesburgo en abril de 1988, aproximadamente 2.000 niños se encontrarían detenidos, de los cuales más de 1.000 estaban prisioneros desde la declaración del estado de emergencia en junio de 1986. Para Pretoria, los niños, así como la historia, representan un enemigo irreconciliable. Ambos representan progresos y cambios.

49. La Asamblea General en varias resoluciones ha reiterado su llamado a todos los Estados para que impongan sanciones globales y obligatorias y adopten medidas que correspondan a fin de aislar efectivamente a Sudáfrica en los planos político, económico, militar y cultural. No obstante, Sudáfrica continúa gozando de beneficios que le brindan las relaciones con algunos países occidentales, convirtiéndose con ello en cómplices del martirio del pueblo de Sudáfrica. La delegación nicaragüense coincide con el Grupo de los Tres en que el "apartheid era una forma de genocidio, de naturaleza similar a la de los crímenes del fascismo y del nazismo, y que, por lo tanto, cabía dentro de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" (E/CN.4/1989/33, párr. 55).

50. No se puede continuar sosteniendo que la adopción de sanciones globales repercutirá en detrimento de las condiciones en que viven los sudafricanos y namibianos. Tal afirmación sólo pone en evidencia las motivaciones económicas de determinados países occidentales en esa región. Los más poderosos aliados de Sudáfrica mantienen gigantescas inversiones en ese país, amparándose en los beneficios y garantías que les ofrece el sistema del apartheid.

51. La colaboración recibida por Sudáfrica de parte de esos países y sus empresas transnacionales constituye el principal obstáculo para el pleno goce de los derechos inalienables de los pueblos sudafricano y namibiano y para la consecución de la paz y la estabilidad en el Africa meridional. La delegación

nicaragüense espera que aquellos que se autoproclaman defensores de la libertad y la democracia valoren más los derechos humanos de 25 millones de personas que las ganancias financieras.

52. Con motivo de los acuerdos de paz entre Angola, Cuba y Sudáfrica pareciera que Namibia va a ser un nuevo Estado entre la comunidad de naciones. Sin embargo, hasta el momento la situación de su población continúa siendo igual: matanzas, palizas, torturas, violaciones. Sudáfrica no es de fiar y pudiera ser que no se diera una auténtica independencia y tampoco la eliminación del régimen del apartheid dentro de sus fronteras. La delegación nicaragüense espera que Namibia sea un Estado libre y soberano, con un gobierno dirigido por la SWAPO, legítimo representante de su pueblo.

53. La Sra. RICART (Pax Romana) dice que una reciente publicación internacional estimaba que como consecuencia de los varios períodos de estado de excepción habían sido detenidas en Sudáfrica 30.000 personas. En este momento hay 200 personas en situación de privación de libertad, sin perspectivas de juicio. Más de 300 han sido juzgadas dos años después de su detención. Quinientas han sido puestas en libertad bajo severísimas restricciones para el desarrollo de su vida personal y profesional. No sólo son objeto de detención y tortura los adultos sino también los niños. Incluso existe una práctica de instalar obligatoriamente a niños en los llamados "campamentos de rehabilitación" o "centros de reeducación", en donde además de ser apartados de sus familias se sabe positivamente que se les somete a malos tratos físicos y mentales.

54. Con la constante agresión a las fronteras de los países vecinos, Sudáfrica manifiesta su propósito de reproducir el sistema de apartheid en su profunda y máxima extensión. El Acuerdo Tripartito de diciembre de 1988 entre los Gobiernos de Cuba, Angola y Sudáfrica hace que en este punto concreto se atisbe alguna esperanza.

55. La reafirmación en la "bantustanización", es decir en redistribuir la localización de la población negra en demarcaciones territoriales diferenciadas y con el ánimo de perpetuar la segregación, no es más que otra de las múltiples violaciones de los derechos humanos fundamentales. Es necesario saber que los aproximadamente 25 millones de negros quedaron confinados en un 13,7% del peor territorio de Sudáfrica. Las subvenciones que el Gobierno de Pretoria destina para la educación de la población negra son siete veces inferiores a las que destina para la población blanca y ello en números absolutos; en cambio el número de personas de raza negra quintuplica al de personas de raza blanca.

56. La medida de gracia en favor de los seis de Sharpeville no debe ser vista sólo como una medida de clemencia, sino también como un instrumento de exhibición con cara al exterior. No hay que olvidar que toda la comunidad internacional conoce las causas que producen las agitaciones sociales en las demarcaciones municipales negras y no sólo eso sino también la inseguridad en el desarrollo de los procesos, cuando los procesados son de raza negra.

57. Las voces de la iglesia de todos los continentes se han hecho oír condenando abiertamente el sistema de apartheid y con motivo de las pasadas elecciones municipales en Sudáfrica, el 26 de octubre, la Iglesia de aquel

país recomendó a los cristianos la no participación en las mismas. También en el mes de octubre, el Arzobispo católico de Durban, Denis Hurley, dijo que la ferocidad e intensidad con que se conculcan los derechos humanos en Sudáfrica es absolutamente reprobable. Robert T. Hennemeyer, representante de la Conferencia Católica de los Estados Unidos, ha pedido a la administración de aquel país que intensifique la presión económica contra el régimen de Pretoria. Desmond Tutu, personaje estimado por todos los hombres de buena voluntad, ha mantenido desde siempre una clara posición contra el régimen racista de Sudáfrica. Hoy mismo se publica en el Vaticano un documento titulado "La Iglesia y el racismo", que contiene la posición oficial de la Iglesia Católica en relación con el apartheid.

58. Pax Romana reconoce los trabajos y decisiones de la Comisión relativos al problema de Sudáfrica y del Africa meridional, pero insiste también en la necesidad de continuar en esta vía, intentando por un lado la extensión de la sensibilización hacia esta cuestión y por otro buscando nuevas medidas coactivas que al ser puestas en práctica por los gobiernos representados en la Comisión tengan la eficacia que todos esperan.

59. El Sr. NCHAMA (Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre las Razas y los Pueblos) dice que esta Organización siempre ha luchado contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica y contra la ocupación ilegal de Namibia. Seguirá haciéndolo hasta que finalmente se erradiquen esos fenómenos.

60. Sin embargo, es importante estar conscientes de las muchas manifestaciones del racismo en otras partes del mundo. En consecuencia, acoge con beneplácito la recomendación de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de que se instituyan medios eficaces de eliminar el racismo en todos los países, o que se refuercen allí donde ya existen. Esta recomendación es en extremo pertinente, habida cuenta de la persistencia del racismo y la xenofobia, a pesar de que 124 países han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

61. El orador hace referencia a diversas manifestaciones graves del racismo en los Estados Unidos, Francia, el Brasil y Rumania. Dos jóvenes negros murieron recientemente en uno de varios incidentes en que participó la policía en Miami. En tales casos, las víctimas generalmente son negras y la policía, blanca. En Francia, a pesar de los intentos de las organizaciones antirracistas, árabes, judíos y negros son sometidos al racismo por parte de la extrema derecha, mientras que en el Brasil los indios yanomami siguen siendo víctimas de las aspiraciones de los buscadores de oro. En relación con los húngaros en Rumania, el orador pide al Gobierno de ese país que ponga fin a las violaciones flagrantes de los derechos humanos que afectan a esa y a otras minorías.

62. Sin embargo, el Movimiento Internacional está más preocupado por las actitudes racistas violentas con que han tropezado últimamente estudiantes africanos en la República Popular China, donde el Gobierno no ha hecho una condena pública de la conducta de los estudiantes chinos. Las autoridades chinas han hecho caso omiso del uso de consignas ofensivas y de las batallas

encarnizadas entre estudiantes africanos y chinos. Otros incidentes semejantes ocurrieron en años anteriores. Los chinos consideran a los negros subhumanos y toda estudiante china que se asocie con un africano es aislada. Este es un tipo de xenofobia que se aplica también a los estudiantes árabes, asiáticos y occidentales.

63. Un traductor chino que trabajaba en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y quería contraer matrimonio con una doctora italiana no pudo volver a su puesto por más de un año, medida equivalente a una violación del principio de una administración pública internacional independiente. Este no es el primer caso de ese tipo.

64. Teniendo en cuenta las obligaciones de China en su calidad de Estado Parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el orador insta al Gobierno de ese país a denunciar todas las manifestaciones de racismo o xenofobia y a instituir medios efectivos para eliminar el racismo, no sólo en relación a sus propias minorías étnicas sino también a los residentes extranjeros en China.

65. En relación con la falta de progresos significativos durante el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, el orador sugiere que ello se puede explicar en parte por las imágenes de superioridad o inferioridad racial y los prejuicios que se imparten en las escuelas. Hay que revisar los libros de texto y los jóvenes deben entrar en contacto con otras culturas a temprana edad, a fin de evitar los prejuicios que se basan fundamentalmente en la ignorancia. Las organizaciones no gubernamentales pueden ayudar a fomentar el intercambio cultural y el diálogo entre las razas, esencial para la paz mundial. Los gobiernos no deben vacilar en aprovechar la experiencia y los recursos de tales organizaciones al establecer sus propios mecanismos contra el racismo.

66. El Sr. MUSA (Federación Mundial de la Juventud Democrática), tras rendir homenaje a los patriotas tales como Dulcie September y Stanza Bopape, que fueron víctimas de los escuadrones de la muerte del régimen de Pretoria, así como a miles de otros, incluso niños, que han sido objeto de detención, tortura o asesinato bajo el estado de emergencia, dice que Sudáfrica es un Estado terrorista cuyo régimen está decidido a permanecer en el poder a toda costa. Ideas tales como compartir el poder sin dominación, otorgar la libre determinación a los diversos grupos y aumentar el alcance de la democracia que se pretende aplicar son, en realidad, el apartheid con otro nombre. Sólo un sistema de un voto por persona, en una Sudáfrica unida, democrática y no racista, puede producir la paz y la justicia para todo el pueblo y para la región en su conjunto.

67. La campaña para que se ponga en libertad de manera inmediata e incondicional a Nelson Mandela y a todos los demás presos políticos debe intensificarse, ya que esa liberación no será resultado de ningún cambio de actitud de parte de las autoridades sudafricanas. Eso sólo se conseguirá cuando la presión en Sudáfrica y en el extranjero, ejercida por todas las fuerzas amantes de la paz y la propia Comisión de Derechos Humanos, deje al régimen racista sin otra alternativa.

68. Es esencial lanzar una campaña masiva para imponer nuevas y más amplias sanciones económicas, decretar un embargo más estricto de armamentos y adoptar otras medidas que permitan aislar aún más a Sudáfrica. A este respecto, señala que su delegación apoya plenamente la labor del Relator Especial, Sr.Khalifa, y espera que se entable un debate constructivo sobre su informe (E/CN.4/Sub.2/1986/6 y Add.1).

69. Se felicita de los acuerdos recientes relacionados con la República Popular de Angola y la independencia de Namibia, progreso importante en la lucha por la liberación africana y el establecimiento de la paz en la región. Esos acuerdos deben aplicarse sin demora. El orador insta a la comunidad internacional a prestar la asistencia correspondiente a la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) durante los próximos meses.

70. La Federación Mundial de la Juventud Democrática apoyará la lucha del pueblo de Sudáfrica y Namibia bajo la dirección de sus representantes auténticos, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica y la SWAPO, hasta que se logre la verdadera independencia y se elimine el apartheid.

71. El Sr. RYDER (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) dice que, durante el año pasado, el régimen de apartheid reaccionó violentamente ante los disturbios y los conflictos laborales en gran escala ocurridos en 1987. Al añadir nuevos instrumentos represivos al arsenal de medidas de que ya disponía en virtud del estado de emergencia, el régimen está tratando de reducir al mínimo las posibilidades de expresión y oposición legítimas y democráticas en el país.

72. En una fase anterior, el Gobierno indicó sus propósitos al decidir la virtual prohibición de 17 organizaciones que representan una amplia gama de la opinión democrática y establecer graves restricciones a la actividad del Congreso de Sindicatos Sudafricanos. La Ley de reforma de las relaciones laborales, que tiene por objeto debilitar y destruir los sindicatos negros independientes, es de gran importancia. Entre otras cosas, la Ley faculta a los empleadores para demandar a los sindicatos por daños y perjuicios y prevé que en caso de conflicto laboral, los procedimientos judiciales serán más complicados y onerosos, y, por consiguiente, menos accesibles a los sindicatos.

73. El orador rechaza la afirmación del Gobierno de que la Ley se justifica por la necesidad de restablecer el equilibrio de fuerzas en las relaciones laborales, que antes favorecía a los sindicatos. De hecho, al promulgarse la Ley, las principales confederaciones sindicales y la asociación de empleadores SACCOLA habían estado a punto de lograr un acuerdo sobre un memorando conjunto en que se pedía que se aplazara la promulgación y se retiraran algunos artículos controvertidos del proyecto de ley. La prisa con que el Gobierno hizo aprobar la legislación muestra claramente su interés en seguir reprimiendo la actividad legítima de los sindicatos, en lugar de promover mejores relaciones laborales.

74. Conforme a dicha Ley, los sindicatos ya han sido enjuiciados y sus protestas pacíficas han provocado una serie de reacciones de los empleadores, entre ellas amenazas de despidos en masa, suspensión del reconocimiento de los sindicatos y demandas de daños y perjuicios. Se prohibió un mitin convocado por el Congreso de Sindicatos Sudafricanos para proyectar otras iniciativas

contra la Ley y poner fin al apartheid, y en la semana anterior a esa prohibición, se detuvo a un gran número de sindicalistas o se restringieron sus actividades.

75. Una denuncia presentada por el Congreso de Sindicatos Sudafricanos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violación de las normas laborales internacionales se remitió al Consejo Económico y Social para su examen. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres confía en que la respuesta de dicho Consejo contribuirá a estimular la actividad de los sindicatos negros independientes en su campaña contra la Ley.

76. Una serie de cuatro nuevos proyecto de ley, presentados en septiembre, darán mayor rigor a la segregación racial y permitirán el traslado de personas de raza negra de un lugar a otro. También es importante que se haya vuelto a presentar el proyecto de ley sobre la promoción de una política interna ordenada, que exigirá a los receptores de fondos extranjeros que revelen su fuente y el propósito a que están destinados.

77. Los negros y sus organizaciones representativas también han sido víctimas de medidas extrajudiciales de intimidación y represión. Se han efectuado numerosos ataques a locales sindicales y han aumentado las actividades de los grupos de "vigilantes" de extrema derecha. La violencia provocada por el Gobierno no se limita a Sudáfrica. El régimen ha continuado sus violentos ataques contra opositores, por ejemplo, en Botswana, Lesotho, Mozambique, Swazilandia, Zimbabwe e incluso en Francia.

78. El orador acoge con interés los recientes acontecimientos de Namibia, cuyos trabajadores, sometidos a una dura explotación, ponen sus esperanzas en la participación de las Naciones Unidas en el proceso de independencia. El movimiento sindical namibiano se encuentra en una fase decisiva de desarrollo y preocupa la posibilidad de que la Comisión que examina las relaciones laborales en ese país no consiga sentar las bases equitativas para su futura evolución.

79. Su organización se siente especialmente inquieta ante los procesos iniciados contra sindicalistas en Sudáfrica. Se debe ejercer presión internacional en favor de Moses Mayekiso, Secretario General del Sindicato Nacional de metalurgia, y de las demás personas que, junto con él, han sido procesadas por traición, así como de los cuatro miembros del Sindicato de trabajadores del transporte condenados a muerte sobre la base de un testimonio sospechoso en relación con un incidente ocurrido durante una huelga.

80. No obstante las restricciones y la represión, el movimiento sindical negro independiente sigue mostrando su fuerza. Aumenta la acción de los trabajadores así como la afiliación a los sindicatos y se ha intensificado la cooperación entre las principales confederaciones.

81. El orador pide que se impongan sanciones obligatorias eficaces contra Sudáfrica. La estructura de las relaciones comerciales de Sudáfrica se modifica en la medida en que el régimen trata de eludir las restricciones en vigor en diversas partes del mundo. Su organización está actualizando la lista de empresas transnacionales que invierten en el apartheid, y ha



publicado recientemente una lista provisional de quienes se benefician con la nueva legislación laboral represiva. Se propone denunciar así a los que desde fuera de Sudáfrica prestan apoyo al apartheid y explotan a sus víctimas y siguen retardando la derrota del sistema.

82. Las actividades del régimen durante los últimos 12 meses han demostrado la imposibilidad de reformar el sistema. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres rechaza las reformas de mera apariencia y seguirá trabajando por la destrucción del apartheid.

83. El Sr. de FARIA (Consejo Mundial de la Paz), quien acoge con interés el informe del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional (E/CN.4/1989/8), expresa su profunda preocupación ante el alcance de las violaciones de derechos humanos que cometen las autoridades sudafricanas. Basta leer la primera parte del informe para comprender que son completamente infundadas las afirmaciones de que se han logrado algunas mejoras. Por el contrario, siguen proliferando las atrocidades que perpetra el más abominable de los regímenes. Repugna advertir que Sudáfrica recibe apoyo diplomático y asistencia de algunos sectores.

84. Con respecto al Acuerdo Tripartito relativo a Namibia, su organización se felicita de que haya terminado el conflicto en Angola y expresa su satisfacción ante el hecho de que, finalmente, se haya llevado a Sudáfrica a la mesa de negociación. Esto ha sido consecuencia de la presión ejercida por los combatientes por la libertad y de los sacrificios realizados por los Estados de primera línea. El éxito también se ha de atribuir, en parte, a la asistencia prestada por las naciones amigas.

85. Sin embargo, sería ingenuo imaginar que el régimen de Pretoria cooperará en la aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, dejará de cometer violaciones de los derechos humanos si puede seguir las cometiendo impunemente, o garantizará las libertades del pueblo namibiano. El informe del Grupo Especial de Expertos demuestra que, durante todo el período de negociación previo a la firma de los acuerdos, han continuado toda clase de violaciones de los derechos humanos. La presencia militar sudafricana en Namibia ha aumentado desde agosto de 1988, puesto que las fuerzas que antes operaban en Angola no han retornado a Sudáfrica, sino a Namibia. Unidades paramilitares, como la "Koevoet", están aterrorizando la parte septentrional del país.

86. En Namibia se lleva a cabo una operación de propaganda, intimidación y represión en gran escala con el propósito de socavar las actividades de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) y de hacer que los namibianos que colaboran con Sudáfrica ganen las próximas elecciones. Por consiguiente, es fundamental mantener la vigilancia.

87. Con respecto a la fuerza militar del GANUPT, es indispensable que no se reduzca la cifra propuesta de 7.500 miembros. Cualquiera que sea su motivación, las propuestas destinadas a reducir ese contingente deben rechazarse categóricamente, ya que cualquier disminución comprometería todo el proceso. El orador insta a la comunidad internacional a que se una para que el pueblo namibiano pueda ejercer el derecho a la libre determinación, a

los distintos Estados a que empleen los poderosos medios de que disponen a fin de ejercer presión en ese sentido, y a las organizaciones no gubernamentales a que desplieguen una red completa de observadores que alerten a la opinión pública acerca de todas las violaciones de los derechos humanos.

88. El Sr. Bossuyt (Bélgica) ocupa la Presidencia.

89. El Sr. SKWEYIYA (Observador del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica) dice que el ANC agradece el apoyo constructivo que en su lucha sigue recibiendo de la comunidad internacional. Varios oradores han manifestado ya la condenación mundial más absoluta del apartheid y se han referido al testimonio de muchas fuentes acerca de sus efectos adversos sobre los pueblos que luchan por sus derechos políticos y de otra índole.

90. Un ejemplo de las medidas represivas adoptadas contra el ANC es el restablecimiento del estado de emergencia en Sudáfrica, en el cual miles de personas siguen siendo víctimas de homicidios, procesos amañados, condenas y ejecuciones injustas. Ultimamente se ha detenido a otros cuatro dirigentes del ANC que se han unido a Nelson Mandela y los demás presos políticos. Más de 80 presos están en espera de ejecución. Muchas barriadas siguen ocupadas por la policía y las fuerzas armadas, que tatan de controlar a la población mediante los denominados centros de administración conjunta.

91. El poder judicial del régimen de apartheid es cómplice de la represión. En un fallo reciente, se considera que la participación en la lucha no violenta contra el apartheid debe considerarse como un delito sancionado con la pena de muerte; el llamado principio del objetivo común se ha citado con consecuencias semejantes en contra de los "seis de Sharpeville". El régimen de Pretoria también se valió el año pasado de los tribunales para proscribir al Frente Democrático Unido y algunos de sus partidarios e imponer graves restricciones al Congreso de Sindicatos Sudafricanos. Además, en 1988 se prohibió en varias ocasiones la publicación de los periódicos New Nation, South Magazine y Weekly Mail. El régimen procura afianzar su fracasado sistema mediante esos actos de represión, pero en la aplicación de su programa de administración de la crisis, tropieza con una resistencia cada vez mayor, que suscita una reacción siempre más brutal.

92. Una de las mayores amenazas de la represión afecta a los trabajadores en general y al movimiento sindical en particular. Se han hecho estallar bombas en los locales del Congreso de Sindicatos Sudafricanos, algunos de cuyos funcionarios han sido detenidos. La Ley de reforma de las relaciones laborales, promulgada en colusión con los empleadores a pesar de las protestas de los trabajadores, perjudica claramente a los trabajadores, así como el proyecto de ley encaminado a impedir que los sindicatos y otros movimientos reciban fondos de organizaciones extranjeras.

93. Aunque se han expresado opiniones contrarias, el ANC estima que la lucha armada contra el apartheid es más importante que nunca. La fuerza ha de ser combatida por la fuerza y todos los acontecimientos recientes han demostrado que el ANC, al mismo tiempo que prosigue sus esfuerzos políticos, debe intensificar también la lucha armada.

94. La evolución positiva en Angola y Namibia representa un progreso decisivo, de buen augurio para la paz en la región, y cabe esperar que las disposiciones del Acuerdo Tripartito se aplicarán rápidamente. El ANC rinde homenaje a las fuerzas armadas de Angola, Cuba y la Organización Popular del Africa Sudoccidental que han infligido una humillante derrota a las fuerzas sudafricanas de invasión, lo cual ha constituido la causa directa de las negociaciones. Otros factores favorables a la celebración de las negociaciones fueron la resistencia constante al régimen del apartheid por parte de los pueblos de Sudáfrica y Namibia y la campaña mundial destinada a aislar económica y militarmente a ese régimen.

95. Sin embargo, a pesar del progreso logrado, debe mantenerse la vigilancia; el régimen sudafricano no ha cumplido sus promesas en el pasado y nuevamente podría quebrantarlas. Una vez más el ANC pide que se decidan sanciones obligatorias, se ponga en libertad a Nelson Mandela y a todos los presos políticos de Sudáfrica y se reconozca la condición de prisioneros de guerra para todos los combatientes por la libertad que han sido capturados.

96. El PRESIDENTE informa que la Comisión ha terminado el examen de los temas 6, 7, 16 y 17 del programa.

CUESTION DE PONER EN PRACTICA, EN TODOS LOS PAISES, LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES QUE FIGURAN EN LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Y ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS ESPECIALES CON QUE SE ENFRENTAN LOS PAISES EN DESARROLLO EN SUS ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE ESTOS DERECHOS HUMANOS CON INCLUSION DE:

- a) LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A DISFRUTAR DE UN NIVEL DE VIDA ADECUADO; EL DERECHO AL DESARROLLO
- b) LOS EFECTOS QUE EL INJUSTO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL ACTUAL TIENE SOBRE LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES EN DESARROLLO, Y EL OBSTACULO QUE ELLO REPRESENTA PARA LA APLICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
- c) LA PARTICIPACION POPULAR EN SUS DIVERSAS FORMAS COMO FACTOR IMPORTANTE DEL DESARROLLO Y DE LA PLENA REALIZACION DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS (tema 8 del programa)

(E/CN.4/1989/3 (capítulo I, sección B, decisión 3), E/CN.4/1989/9, 11, 12, y 50; E/CN.4/1989/NGO/13, 16 y 24; E/CN.4/1988/1); A/43/739)

SITUACION DE LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (tema 18 del programa)

(E/CN.4/1989/50 y 62; E/CN.4/1989/NGO/11; A/43/518; E/C.12/1988/1; CCPR/C/2/Rev.1)

97. El Sr. MARTENSON (Secretario General Adjunto de Derechos Humanos), quien presenta el tema 8 del programa, dice que se ha establecido en forma reiterada que los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales van juntos y que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, planteamiento confirmado

en la Proclamación aprobada en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en 1968 en Teherán, y más adelante en varios otros instrumentos.

98. En 1968, la Comisión de Derechos Humanos comenzó a examinar la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. En 1969, designó un Relator Especial para que efectuara un estudio sobre la cuestión de poner en práctica los derechos económicos, sociales y culturales: problemas, políticas y progresos. En 1973 se presentó el informe a la Comisión y, en 1975, ésta decidió mantener el actual tema 8 en su programa como tema permanente de gran prioridad.

99. En los últimos años, la Comisión ha instado a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a que le preste asistencia en su examen de las cuestiones relativas a la promoción y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. En su período de sesiones de 1987, la Comisión pidió a la Subcomisión que formulase recomendaciones a la Comisión, en su actual período de sesiones, sobre la forma de promover más eficazmente la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante las actuaciones de las Naciones Unidas y otras actividades.

100. Conforme lo había autorizado en 1988 la Comisión, la Subcomisión designó, en su resolución 1988/33, al Sr. Danilo Türk como Relator Especial, encargado de presentar un informe preliminar a la Subcomisión en su período de sesiones de 1989. La Comisión tiene ante sí, en relación con este tema, varias cuestiones concretas de importancia. Al igual que en años anteriores, la Comisión examinará políticas encaminadas a la aplicación, promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales, conforme a recomendaciones de sus propios órganos subsidiarios y a la información recibida de gobiernos, órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales acerca de sus políticas a ese respecto (E/CN.4/1989/9).

101. Desde 1981, la cuestión del derecho al desarrollo ha constituido una de las principales preocupaciones de la Comisión, y ese año se creó un grupo de trabajo sobre el tema. Sobre la base de la labor realizada por el grupo de trabajo y la Comisión, la Asamblea General, en su cuadragésimo primer período de sesiones, aprobó la Declaración sobre el derecho al desarrollo. De conformidad con una resolución aprobada por la Comisión en su anterior período de sesiones, el Grupo de Trabajo de expertos gubernamentales sobre el derecho al desarrollo se reunió en Ginebra durante dos semanas, en enero de 1989, e hizo algunas propuestas muy importantes, con arreglo a su mandato de examinar recomendaciones a la Comisión sobre medidas prácticas para aplicar la Declaración. El Presidente del Grupo de Trabajo presentará su informe a la Comisión.

102. En 1985, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó a la Comisión un informe sobre la cuestión de la participación popular como factor importante de la plena realización de todos los derechos humanos. Desde entonces, la Comisión ha invitado a los gobiernos, órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales a que hagan comentarios sobre el estudio. La Comisión tendrá ante sí los

comentarios recibidos, que figuran en el documento E/CN.4/1989/11. También dispondrá, en el documento E/CN.4/1989/12, del estudio del Secretario General preparado de conformidad con la resolución 1987/21 de la Comisión, acerca de la legislación y de las prácticas relativas a la participación popular en sus diversas formas como factor importante del desarrollo y la plena realización de todos los derechos humanos.

103. El orador confía en que las deliberaciones y decisiones de la Comisión sobre varias otras cuestiones en el contexto de este tema, como el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la propiedad, aportarán una contribución al objetivo de promover el progreso social y lograr mejores niveles de vida en el marco de libertades más amplias.

104. Al presentar el tema 18 del programa, el orador señala que la Comisión tiene ante sí un informe del Secretario General (A/43/518), que contiene información sobre la situación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y, en particular, sobre la labor del Consejo Económico y Social y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con respecto a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como lo pidió la Comisión en su resolución 1988/27. De conformidad con la misma resolución, la Comisión dispondrá también de información acerca de la situación de las reservas, declaraciones, notificaciones y objeciones relativas a ambos Pactos (E/C.12/1988/1 y CCPR/C/2/Rev.1).

105. Noventa y dos Estados han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o se han adherido a él; 87 Estados han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o se han adherido a él. Desde el 44° período de sesiones de la Comisión, Guatemala ha pasado a ser Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, Gambia, Hungría y el Togo se adhirieron al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con lo que el número de Estados Partes en el Protocolo asciende a 43; 23 Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han formulado hasta ahora la declaración prevista en el artículo 41.

106. El Comité de Derechos Humanos establecido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos presentó su 12° informe anual a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de sesiones. El informe se refería a las actividades del Comité en su 31°, 32° y 33° períodos de sesiones y contenía el examen de los informes presentados por 13 Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto, así como el texto de 21 decisiones en que se formulaban las opiniones del Comité relativas a las comunicaciones presentadas con arreglo al Protocolo Facultativo. Figuraban también en el informe los antecedentes sobre el estudio de las comunicaciones realizado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo y sobre su labor relativa a los comentarios generales previstos en el párrafo 4 del artículo 40 del Pacto.

107. En cuanto a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado de conformidad con la resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social, celebró su segundo período de sesiones en febrero de 1988

en Ginebra y examinó los informes presentados por los Estados Partes sobre los derechos reconocidos en los artículo 6 a 9, 10 a 12 y 13 a 15 del Pacto. El Comité presentó un informe al Consejo Económico y Social en su primer período ordinario de sesiones de 1988 (E/1988/14), que contenía conclusiones así como recomendaciones sobre sus futuros métodos de trabajo. En cumplimiento de la resolución 42/105 de la Asamblea General, el Comité examinó también la cuestión de las obligaciones en materia de presentación de informes de los Estados Partes en el Pacto e incluyó recomendaciones sobre esta materia en su informe al Consejo.

108. En su resolución 1988/4 el Consejo, entre otras cosas, hace suya la recomendación del Comité de que se pida a los Estados Partes que presenten un informe único en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Pacto para el Estado Parte interesado y posteriormente a intervalos de cinco años; autoriza al Comité para que, dentro de los recursos disponibles, establezca un grupo de trabajo anterior al período de sesiones que se reúna por un período de hasta una semana antes de cada período de sesiones; y decide transmitir el informe del Comité a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de sesiones para que lo examine en relación con el tema titulado "Pactos internacionales de derechos humanos".

109. En su resolución 1988/5, el Consejo, entre otras cosas, reafirma el importante papel del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en lo que respecta a la aplicación por los Estados Partes de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, y expresa su satisfacción por la forma dedicada y constructiva en que los Comités ejercen sus funciones.

110. La Asamblea General, en su resolución 43/113, hace un llamamiento a todos los Estados para que apliquen políticas encaminadas a la realización, promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos reconocidos en los Pactos Internacionales de derechos humanos y en otros instrumentos internacionales; pide a la Comisión de Derechos Humanos que preste más atención a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en relación con los temas pertinentes del programa; y afirma la importancia y pertinencia, para los programas y actividades realizados en todo el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, de los informes presentados por los Estados Partes en los Pactos internacionales de derechos humanos al Comité de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

111. En su resolución 43/114, la Asamblea General también pone de relieve la importancia de que los Estados Partes cumplan en la forma más estricta las obligaciones que les imponen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, cuando proceda, el Protocolo Facultativo de este último Pacto. Asimismo, destaca la importancia de evitar el menoscabo gradual de los derechos humanos por la suspensión de las obligaciones contraídas en virtud de los Pactos y subraya la necesidad de que se observen estrictamente las condiciones y los procedimientos convenidos en materia de suspensión de las obligaciones con arreglo al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo presente la necesidad de que los Estados Partes proporcionen la información más completa posible durante los estados de emergencia.

112. En la misma resolución, la Asamblea General hace un llamamiento a los Estados Partes en los Pactos que han ejercido su derecho soberano de formular reservas de conformidad con las normas pertinentes de derecho internacional para que consideren la posibilidad de revisar alguna de dichas reservas; y pide al Secretario General que mantenga informado al Comité de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acerca de las actividades pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos y que transmita a dicha Comisión los informes anuales de ambos Comités.

113. Además, la Asamblea General, en su resolución 43/115, pide al Secretario General que transmita a la Comisión de Derechos Humanos las conclusiones y recomendaciones de la reunión de las personas que presiden los órganos creados en virtud de los tratados sobre derechos humanos (HRI/MC/1988/1) y solicita a la Comisión, habida cuenta de las responsabilidades globales que le corresponden en la esfera de los derechos humanos, que examine con carácter prioritario las conclusiones y recomendaciones de esa reunión, en particular aquellas que se considere requieren la adopción de medidas urgentes, y que presente un informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo cuarto período de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social.

114. En la misma resolución, la Asamblea invita a los Estados Partes en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a que estudien en sus reuniones nuevos métodos de simplificar y mejorar en general los procedimientos de presentación de informes, y de mejorar la coordinación y la corriente de información entre los órganos creados en virtud de los tratados, y entre éstos y los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, incluidos los organismos especializados; la Asamblea acoge asimismo con satisfacción los esfuerzos de los órganos creados en virtud de los tratados por simplificar y racionalizar los procedimientos de presentación de informes, especialmente mediante la ampliación de los plazos de presentación, el mejoramiento de la eficacia de los métodos de trabajo y la armonización y simplificación de las directrices en materia de presentación de informes.

115. La Asamblea General también pide al Secretario General que examine, con carácter prioritario, la terminación del manual detallado de presentación de informes para ayudar a los Estados Partes a que cumplan sus obligaciones en esa materia, y que, de acuerdo con lo solicitado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prepare un informe en el que se indique el alcance y el carácter de toda duplicación de las cuestiones abordadas en los tratados internacionales sobre derechos humanos; y que, sirviéndose de las fuentes oficiales de las Naciones Unidas, facilite una compilación de estadísticas en relación con el examen por los órganos creados en virtud de los tratados de los informes de los Estados Partes; y pide asimismo al Secretario General que considere la posibilidad de confiar, dentro de los recursos existentes, a un experto independiente la tarea de preparar un estudio sobre los posible enfoques a largo plazo para la supervisión de nuevos instrumentos sobre derechos humanos.

116. La Asamblea General pide además al Secretario General que organice, dentro de los recursos existentes y teniendo en cuenta las prioridades del programa de servicios de asesoramiento, nuevos cursos de capacitación para los países que experimenten dificultades más serias en el cumplimiento de la obligación de presentar informes conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.